

CONTRA : CHRISTIAN FELIPE ANTONIO VALDÉS MORALES.
DELITO : ARROJAR ARTEFACTO EXPLOSIVO O INCENDIARIO.
RUC N° : 1901292336-0.
RIT N° : 234-2020.

Santiago, seis de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que, con fecha veintinueve y treinta de julio y dos de agosto del año en curso, ante la sala del Cuarto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los magistrados don Juan Carlos Urrutia Padilla, en calidad de juez presidente, doña Cristina Cabello Muñoz y doña María Alejandra Cuadra Galarce, se llevó a efecto audiencia de juicio oral en causa RIT 234-2020, en contra de **Christian Felipe Antonio Valdés Morales**, cédula de identidad N° 18.941.653-9, nacido en Santiago, el 19 de junio de 1995, de veintiséis años de edad, soltero, carpintero, domiciliado en Avenida Lo Ovalle N° 655, comuna de San Miguel.

La acción penal fue sostenida por el Ministerio Público representado por la Fiscal Viviana Vergara Ayala, fue parte querellante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública representado por Magdalena Nayel Morel, en tanto la defensa del acusado estuvo a cargo de los Defensores Privados Washinton Lizana Ormazábal y Ramiro Gutierrez Acuña, todos con domicilio y forma de notificación registradas en el tribunal.

SEGUNDO: Acusación. La imputación efectuada por el Ministerio Público en contra del acusado ya individualizado, según el correspondiente auto de apertura del juicio oral, es la siguiente:

El día 28 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 18:58 horas, en la vía pública, en las inmediaciones de Plaza Italia, específicamente en la intersección de calles Merced con Irene Morales, en la comuna de Santiago, el acusado Christian Felipe Antonio Valdés Morales, fue sorprendido por funcionarios de Carabineros de Chile, cuando transporto, encendió y arrojó a un vehículo policial de Fuerza

Especiales que se encontraba en lugar, una bomba molotov o incendiaria, compuesta de una botella de vidrio, combustible y una mecha en su interior.

El Ministerio Público estima que los hechos descritos son constitutivos del delito de atentado explosivo o incendiario, arrojando bomba molotov, ilícito previsto y sancionado en el artículo 14 D, en relación artículo 3° inciso 2°, de la ley 17.798, en grado de ejecución consumado.

A juicio de la Fiscalía al acusado Christian Felipe Antonio Valdés Morales, le cabe una participación en calidad de autor en este ilícito, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, toda vez que tomó parte en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa.

Estima el ente persecutor que respecto del acusado Christian Felipe Antonio Valdés Morales, no concurren circunstancias atenuantes de responsabilidad penal y lo perjudica la circunstancia agravante de responsabilidad penal prevista en el artículo 12 N° 13 del Código Penal, esto es “ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública...”.

Cita como preceptos legales aplicables los siguientes: Artículos 248 letra b), 259 y siguientes del Código Procesal Penal; artículos 3 y 14 D de la Ley N° 17.798, además los artículos 1, 12, 24, 28 y 31 del Código Penal y demás disposiciones legales pertinentes.

Considerando la pena asignada por la ley al delito por el que se acusa, la participación criminal atribuida al acusado, el grado de desarrollo, la no concurrencia circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la extensión del mal causado por el delito, el Ministerio Público solicita se condene al acusado Christian Felipe Antonio Valdés Morales, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las penas accesorias legales, comiso y se le condene al pago de las costas conforme lo previsto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

Asimismo, pide la Fiscalía que de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970 sobre Sistema Nacional de Registros de ADN, se adopten las medidas correspondientes, para determinar la

huella genética del condenado previa toma de muestras biológicas, y ordenar la incorporación de dicha huella genética al Registro de Condenados, en su oportunidad y en caso de ser procedente.

TERCERO: Alegatos apertura. En su ***alegato de apertura***, el **Ministerio Público** señaló que señala que el caso que se trae a juicio es sobre el delito de lanzamiento de bomba molotov, ya que el año 2015 se modificó la ley 17.798 y se incorporó esta figura. Se trata de un hecho del mes de noviembre de 2019, en que el acusado se encontraba vestido de una manera muy particular, a torso descubierto, con antiparras blancas y una capucha confeccionada con una polera, y fue sorprendido en los momentos precisos que confeccionó y lanzó la bomba al carro lanza aguas de carabineros en una manifestación.

Señala la persecutora, que para acreditar el hecho, se cuenta con prueba proveniente de distintas fuentes, toda vez que se oirá a dos funcionarios de carabineros que observaron el hecho, a los funcionarios que participaron de la detención del imputado y que corroboran los elementos identificativos que usaba el encartado. Asimismo, se exhibirán imágenes de grabaciones, provenientes de dos fuentes, de las cámaras de la municipalidad, y del video tomado por uno de los funcionarios de carabineros en el momento que lanzó la bomba, en las que se aprecia al acusado en la acción descrita. Adicionalmente, refiere la fiscal, que prestará declaración una perito antropóloga de Labocar, que dará cuenta de los puntos físicos y de vestimentas con los cuales se logró identificar al acusado y al sujeto que aparece en las grabaciones. Estima, que los medios de prueba reseñados serán suficientes para superar la presunción de inocencia y crear convicción de condena en el tribunal, más allá de toda duda razonable.

A su turno, la **Querellante**, en sus alegaciones de inicio indicó que estamos frente a hechos del estallido social, señalando que como argumento adicional a los expuestos por el Ministerio Público, que a través de la prueba, se acreditará que el acusado transportó, encendió y arrojó una bomba molotov, conducta a través de la cual, atentó contra la seguridad pública, sin que se pueda desconocer la gravedad de los hechos en los que el acusado actuó, con los que puso en riesgo la vida

de las personas que allí se encontraban, solicitando en consecuencia, la condena en los términos de la acusación.

Por su parte, la **Defensa** en sus alegatos de apertura solicitó la absolución de su representado, señalando que al final del juicio, la prueba del Ministerio Público será insuficiente para acreditar los hechos de la acusación. Refiere que su solicitud se basa en dos situaciones, en primer lugar, en que parte de la prueba es ilícita, ya que deriva de actuaciones ilegales de la policía, que se encontraba en el sector en virtud de una orden de investigar y uno de ellos, grabó con su celular lo que estaba aconteciendo, diligencia que atenta contra disposiciones del Código Procesal Penal, específicamente, el artículo 226 y 226 bis, ya que ciertas diligencias como la filmación efectuada, requería de autorización judicial para su materialización, no pudiendo quedar al arbitrio de la policía. Pone de relieve la defensa, que el Estado de Derecho implica que las policías, en su calidad de agentes del Estado, deben someterse a la ley y de no hacerlo, se vulnera el debido proceso que dispone el estricto cumplimiento de la ley en las investigaciones judiciales. En consecuencia, lo anterior nos conduce a la ilicitud de la prueba, que se extiende a las pericias que se realizaron con la grabación realizada y el tribunal no la podrá valorar.

En un segundo orden de ideas, refiere que el resto de la prueba no será suficiente para acreditar los hechos objeto de la acusación fiscal, ya que se atribuye el lanzamiento de un artefacto incendiario a su representado, pero las cámaras de la municipalidad evidencian sólo que el acusado tuvo participación en la manifestación que se desarrollaba ese día y arrojó un objeto y la pregunta que deviene es referente a la naturaleza del objeto que arroja, era una bomba?. Cree que al respecto no es suficiente la declaración de los policía, no hay pericias que den cuenta de aquello y que genere convicción respecto del artefacto que estaba en manos de su representado que debe ser del tipo incendiario para que se configure el ilícito en estudio. Agrega, que la única prueba científica que se presentará en estrados no hace más que sustentar la posición de la defensa, ya que la perito química forense dirá que no había presencia de restos de material inflamable en las manos o ropas de su representado, de modo tal que el Ministerio

Público no logrará derribar la presunción de inocencia que ampara al acusado y en consecuencia, solicita su absolución.

CUARTO: Alegatos de clausura. El Ministerio Público en sus alegatos de cierre, expuso que se hará cargo de los dos cuestionamientos de la defensa: la existencia de prueba ilícita y que la prueba sería insuficiente para establecer los hechos de la acusación. En relación a la ilicitud, un elemento determinante fue la exhibición de los videos, que fueron obtenidos de fuentes diversas, a saber, de las cámaras de la municipalidad y del celular del cabo Dercolto. Hace hincapié la acusadora en que no es efectivo que haya un origen lícito en las mismas, ya que el mayor Martínez reportó en forma clara en estrados, que las imágenes fueron enviadas al WhatsApp del equipo que prestaba funciones ese día y Dercolto aclaró que las tomó ante la comisión de un delito flagrante, asimismo, se conoció en juicio, que las otras cámaras eran observadas por la teniente Galaz en la municipalidad. Agrega la fiscal, que estos videos fueron respaldado en una cadena de custodia con un número único de evidencia, circunstancia que fue ratificada por el cabo Loncón que las recibió para periciar y luego, las peritos correspondientes pudieron trabajar efectuando los análisis comparativos de las mismas con las imágenes del detenido y las especies incautadas. Pone de relevancia la acusadora, que las grabaciones hablan por si mismas, indicando que lo más determinante de la grabación, dice relación al cuestionamiento de la defensa en torno si el objeto lanzado era o no una bomba molotov y al respecto, refiere que la perito Mendizábal - que recibe el DVD con la correspondiente NUE - concluye que después de la comparación en la imagen y haberle aplicado zoom, que la contextura, vestimenta y físico del imputado se corresponden con las características del detenido y recalca - en su calidad de diseñadora grafica - que se trata de imágenes de buena resolución. Además, indicó la referida perito, que en la fotografías que acusado aparece lanzando la bomba, se observa una mancha en la imagen que impresiona como la llama de un elemento incendiario, agregando, que se ve alargada porque iba en movimiento. Apunta la fiscal, que la defensa dirá que no se realizó un peritaje que determinara que efectivamente se trataba de una molotov, pero era

imposible hacer peritaje a las botellas, ya que difícilmente se podía alejar a los manifestantes, cerrar el sitio del suceso y determinar que algún resto de botella correspondía a la lanzada por el acusado, ya que había más personas participando de la manifestación.

En cuanto a la insuficiencia probatoria, refiere que el peritaje químico que explicó la perito químico no fue concluyente para ratificar la teoría de absolución de la defensa, ya que reportó que las muestras son negativas por dos hipótesis: no hubo manipulación de un artefacto incendiario o que por el tiempo y volatilidad de los derivados de los hidrocarburos, no fue posible su hallazgo, y agrega la fiscal, que la perito informó en relación a la volatilidad de estos elementos que el tiempo máximo de control instrumental es una hora y en este caso, el imputado lanzó la bomba y después de una hora y media fue detenido, luego, en la comisaría se llenan las actas y después de todo aquello, se hizo la prueba, es decir al menos habían transcurrido dos horas. Todo lo anterior, unido a que no hay teoría alternativa de parte de la defensa, que justifique la absolución que pretende, ya que el acusado ni siquiera declaró.

En relación a los funcionarios de carabineros, refiere la acusadora que fueron declaraciones extensas y contestes en lo que vieron el día de los hechos, consistente en que observaron a un sujeto agachado que introdujo algo en la botella y ahí Dercolto comenzó a grabar, y desde ahí todo lo acontecido se vio en las imágenes, especialmente el lanzamiento del artefacto incendiario. Las vestimentas eran tan características, que no fue difícil indicarlos y compararlos en las imágenes obtenidas. Los funcionarios también hablaron de la manipulación del artefacto al encontrarse el sujeto agachado con la botella, y si bien en sus declaraciones hay pequeñas diferencias, en torno a hablar de manipulación u otro verbo, lo claro es que se vio nítidamente que el sujeto de las imágenes, metió la mecha, la encendió y la lanzó. El carro policial se movía de lugar y pudo haber mojado el artefacto, pero se debe tener en consideración que la ley no exige que el lanzamiento de la bomba molotov cause daño y ésta no explotó por motivos diversos. En relación al funcionario Martínez, refiere la fiscal, que estaba a cargo del procedimiento, explicó en la audiencia por qué trabajan con la red

social WhatsApp, reportando que el supervisó todo el procedimiento y que las imágenes se extrajeron y se entregaron al teniente Osorio, ratificando de esa manera, la legalidad de la cadena de custodia y la manipulación de éstas.

En cuanto a la prueba ilícita, señala la representante del Ministerio Público, que en el procedimiento hay dos grandes instancias para cuestionar la legalidad de las diligencias relativas a la investigación, la audiencia de control de detención, en que fue declarada legal la detención del acusado y en la preparación de juicio oral, en la cual no se hizo ninguna petición de exclusión de prueba, y éstas fueron ingresadas sin debate. En cuanto al artículo 226 Código Procesal Penal en lo que dice relación a las grabaciones, señala la fiscal que difícilmente se puede exigir derecho a la intimidad en la vía pública, en que ha cámaras en distintos lugares, y la autorización a la que se refiere la norma citada, es para aquellas diligencias en las que se infringen derechos o garantías. Agrega, que otro tema cuestionado por la defensa, se refiere las comunicaciones de WhatsApp, y señala que el único medio tecnológico en que se podían contactar los funcionarios es el WhatsApp, ya que no tienen celular institucional y el funcionario Dercolto señaló que se encontraba ante la comisión de un delito flagrante, que le otorgaba la facultad y obligación de actuar, entregándoles facultades autónomas. En este caso se estaba cometiendo el ilícito, el funcionario actúa dentro del margen legal. Si fueron explicitadas en la declaración policial no es relevante, ya que pretender aquello implicaría prácticamente volver al sistema inquisitivo, y lo que se pretende es que los funcionarios declaren lo sustantivo y en este caso, fueron claros en señalar que vieron al sujeto lanzar el artefacto. El resto de las situaciones, se declaran en juicio y el resto de la estrategia policial fue consignada, la perito indicó cuales eran las imágenes de WhatsApp, de manera que se dejó registro de ellas y de donde se obtuvieron. Efectivamente, con la prueba no sólo hubo medios complementarios y corroborativos, sino que se acreditaron los hechos y la participación del acusado. En cuanto a la agravante señala que no concurre por el contexto de los hechos.

Por su parte, la **Querellante** indicó en sus alegatos de cierre que el acusado Valdés cometió el delito de arrojar un artefacto incendiario, que es un ilícito de mera actividad, en el cual se atentó contra la seguridad pública y de la gente que se encontraba en el lugar, de manera que estima que se debe condenar al acusado. Agrega, que a su juicio, con la prueba que se rindió en el trascurso del juicio, se acreditó el tipo penal y la participación. Precisa, que sobre las alegaciones de la defensa relativas a que se presentó prueba ilícita, que puede calificarse la actuación policial de tomar registros audiovisuales, como enmarcadas en las facultades que le confiere la ley, en que no se vulneran las garantías del debido proceso. En segundo lugar y en cuanto a la insuficiencia probatoria, refiere que el acusado estaba en el lugar y lanzó el objeto incendiario y se dirá que no se trata de una bomba molotov, aduciendo que no son suficientes a ese efecto, las declaraciones de los dos funcionarios, pero al respecto, señala que la circunstancia que no le hayan encontrado residuos de hidrocarburos al acusado, en nada influye, ya que este resultado negativo se debe al transcurso del tiempo entre el contacto con el líquido inflamable y la toma de la muestra. Sin embargo, la querellante invita a razonar que estamos en la segunda hipótesis presentada por la perito químico, es decir, que la ausencia de residuos se explica por el transcurso del tiempo, indicando que además, se debe valorar las declaraciones de los funcionarios que fueron claros en afirmar que el encartado había manipulado, encendido y lanzado el artefacto incendiario. Adicionalmente manifiesta, que se cuenta con la prueba de los registros de las cámaras municipales y WhatsApp en que se lo ve encender la mecha y arrojar el artefacto encendido al carro policial. Asimismo, en la mochila había dos encendedores y teniendo en cuenta el contexto social en que se comete el delito, en que el acusado estaba en una manifestación cercana al estallido social y en razón de las máxima de la experiencia, se debe concluir que no puede tratarse de otra cosa que una bomba molotov, ya que si no había líquido al interior de la botella, no hubiese encendido. Solicita la condena de Christian Valdés a la pena indicada en acusación.

La **Defensa** en sus alegatos de clausura señala que planteó en sus alegatos de inicio que su solicitud de absolución se funda en dos líneas de argumentación, en primer lugar, que parte de la prueba del Ministerio Público es ilícita y además, insuficiente para acreditar el delito. Es ilícita ya que deriva actuaciones ilegales de la policía, infringiendo la garantía del debido proceso que exige que el procedimiento penal se ajuste a la ley, y precisamente en este caso, el artículo 226 y 226 bis del Código Procesal Penal son un imperativo para los órganos de investigación penal, a diferencia de hechos sorprendentes o inusuales o flagrantes, que permitirían recabar medios de otro modo. Por el contrario, en este caso, los funcionarios Bustamante y Dercolto y el jefe Martínez, dieron cuenta en estrados, que concurrieron al lugar de los hechos en virtud de una orden de investigar por acontecimientos ocurridos en Plaza Italia y que estaban dirigidas por un fiscal determinado y era obvio, que dada la naturaleza de los ilícitos era necesario contar con antecedentes audiovisuales de los hechos, pero ello no lo dispuso el fiscal, incumpléndose en consecuencia, esa exigencia normativa, siendo claros los artículos citados en orden a que las fotografías y filmaciones requieren de la autorización de un juez de garantía, de manera que la policía debe someterse a las instrucciones entregadas y en este caso, se saltaron la exigencia legal, razón por la cual, las grabaciones adolecen de vicio y no se deben valorar. Si se analiza el procedimiento en cuanto al contexto, hay un conjunto de circunstancias que atacan la valoración de los dichos de Dercolto y Bustamante, que observaron a su representado, pero en sus relatos hay falta de precisión y claridad, que no dice relación con la acción específica, sino que pretendieron introducir información en forma sorprendente y si bien el Auto de Apertura dice que su representado *transportó, encendió y arrojó*, no existe precisión y claridad en torno a aquello y existe cierta irregularidad, ya que el problema no es que se use WhatsApp, - ya que es entendible su utilización en ese contexto - pero hay WhatsApp que los mismos funcionarios dicen que fueron borrados y no se levantó registro de las comunicaciones efectuadas en el equipo investigativo, no se levantó acta de aquello y teniendo en cuenta que esa red social fue el principal instrumento para la

información dada a los policías y ellos a través de éste dieron cuenta de datos que no estaban en la investigación, generándose el cuestionamiento de su parte. Estos dichos, en cuanto a la fabricación, introducir un género, etc., no coinciden con la prueba de las cámaras municipales en que los dichos de los funcionarios no quedaron registrados.

Agrega el defensor que la tesis principal es la insuficiencia de prueba, ya que se trata de un delito del artículo 14 D de la ley 17.798, en que es claro que se debe identificar el objeto material del delito, ya que el artículo habla de bombas incendiarias que allí describe con los elementos típicos de su confección, indicando como ejemplo las bombas molotov cuyos componentes son pequeñas cantidades de combustible de libre venta al público y de bajo poder expansivo. Al respecto, en este juicio, no hay prueba directa de que se trate de uno de esos artefactos que la norma describe, ya que no se contó con prueba química que de fe en cuanto a que la botella que fue arrojada tenía las características descritas por la norma y en relación a ese punto, los funcionarios dijeron en juicio que no pudieron recabar el elemento por el contexto en que se desarrollaban los hechos, sin embargo, ellos grabaron lo que estaba aconteciendo, con todo el riesgo que ello implica, teniendo en cuenta además, que grabar es más riesgosos que acercarse al parque y recoger el elemento en cuestión, o si se estimaba que no era posible a esa hora, si pudiese haberse recogido a una hora más segura. No se cuenta con esa prueba, pero podría haberse incorporado prueba indirecta o indiciaria para construir la premisa fáctica, pero tampoco se cuenta con aquello, de manera que se trata de un hecho que no ha sido probado fehacientemente, de manera que no es posible arribar a la conclusión que la botella tenía combustible. Al respecto, las grabaciones y de los dichos de los funcionarios, dan cuenta que lo que se prendió fue el trapo que tenía la botella, que en el trayecto se apagó, según dijo Bustamante por la acción del agua. En ese contexto, elementos o indicios podrían haber sido que explotara el artefacto, lo que no ocurrió, pero se podría haber contado con otra prueba como el aroma del combustible y los funcionarios no dan cuenta de ello. Tampoco al momento de la detención ellos percibieron olor a combustible, lo que es

reforzado con la pericia de la química Marcela Guerrero, que no detectó la presencia de residuos en las manos y si bien se da una explicación de aquello, dichos elementos químicos no actúan de la misma manera en las prendas en que también se realizó la pericia como la polera y zapatillas y aun así, no se encontraron elementos o residuos de bencina. Pone de relieve el defensor que ni de los videos ni de las declaraciones de los funcionarios de oídas, ni de las peritos que analizaron los videos es posible inferir elementos que nos permitan afirmar que la botella tenía combustible. Las peritos que analizaron los videos tampoco pudieron inferir el elemento necesario para configurar el delito del artículo 14 D de la ley 17.798 y discrepa con la querellante en que las máximas de la experiencia es una argumentación probatoria suficiente, ya que se pregunta qué máximas de la experiencia, toda vez que se ha visto que en las protestas se usan artilugios en contra de las fuerzas especiales, como botellas con pintura, con ácido muriático o sulfúrico, bombas de ruido, y en este juicio no hubo prueba que se trataba de una bomba molotov, ni tampoco en qué consisten aquellas. Sólo se acredita que el acusado arrojó una botella con un género en contra de la policía o hacia el parque y se apagó el trapo, se debe aplicar el principio in dubio pro reo, consecuencia del principio de inocencia y la forma de favorecerlo es absolverlo.

QUINTO: Declaración del acusado. Que, consultado respecto de la posibilidad de declarar en los términos previstos en el artículo 326 del Código Procesal Penal, el imputado hizo uso de su derecho a guardar silencio.

SEXTO: Convenciones probatorias. Que, según se consigna en el auto de apertura, los intervinientes no arribaron a convención probatoria alguna.

SEPTIMO: La prueba de cargo. Que, con la finalidad de aclarar los hechos materia de la acusación y la participación del acusado en los mismos, el Ministerio Público incorporó legalmente al juicio las siguientes probanzas:

I. TESTIMONIAL: Consistentes en las declaraciones de:

- 1) Gonzalo Esteban Bustamante Henríquez.
- 2) Neil Alexis Dercolto Rojas.

- 3) Álvaro Andrés Martínez Verdugo.
- 4) Henry Osvaldo Sotomayor Arauco.
- 5) Erwion Abel Loncón Leviante.

II. PRUEBA PERICIAL:

- 1) Guillermo Andrés Olivares Bruna.
- 2) Marcela Guerrero Langenegger.
- 3) Vanessa Daniela Saldías Vergara.
- 4) María Angélica Mendizábal Cofré.

III.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA (de acuerdo a su numeración en el Auto de Apertura).

1.- Set fotográfico compuesto por 12 imágenes, contenidas en informe policial, confeccionadas por oficial investigador Erwin Abel Loncon Leviante, donde se comparan las imágenes extraídas de videos, con el acusado y sus vestimentas incautadas.

3. Set fotográfico compuesto por 105 imágenes, contenidas en informe pericial de identificación forense N° 10603-02-2019.

5.- NUE 4988076, donde se contiene registro digital de cámaras de seguridad y aquellos registros obtenidos directamente por los policías y testigos presenciales desde la comisión del ilícito hasta su detención.

OCTAVO: Prueba de la Defensa. Que, la defensa no presentó prueba propia y no se valió de la presentada por el Ministerio Público.

NOVENO: Valoración de la prueba respecto del hecho punible.

I.- En cuanto a la Dinámica de los Hechos.

Que, con la prueba rendida en juicio, el Ministerio Público ha podido acreditar, más allá de toda duda razonable, que los hechos ocurrieron de la forma descrita en la acusación,. Es así como en primer lugar prestó declaración el cabo 1° de carabineros **Gonzalo Bustamante Henríquez**, miembro del OS7, que con fecha 28 de noviembre de 2019, se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, en virtud de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Centro Norte para la investigación de diversos delitos ocurridos en el contexto del estallido social. Se desplazaba a pie y lo acompañaba el cabo 1° Neil Dercolto y aproximadamente a las 18:48 horas, observaron a un sujeto que vestía capucha gris, antiparras blancas, torso desnudo, shorts bermudas de

jeans color azul y bóxer azul con letras rojas que decía TOP, usaba una mochila de distintos colores y tenía un tatuaje en el brazo derecho, quien confeccionó y lanzó una bomba molotov a un carro policial que se ubicaba en calle Irene Morales con Merced. Luego de ello, lo mantuvieron a la vista, se trasladó a un monolito ubicado en el Parque Bustamante y luego caminó a calle Ramón Carnicer con Bilbao, lugar en que fue detenido a las 20:25 horas aproximadamente.

Precisa en cuanto a los hechos que observaron al sujeto que en Irene Morales con Merced se agachó, dándole la espalda al carro policial encendió el artefacto, se dio vuelta, caminó rápido y tomando impulso y lo lanzó al carro. La botella estaba encendida y usó un encendedor para prenderla, pudiendo ver el fuego, sin embargo el artefacto si bien iba con llama, no explotó ya que se apagó en la trayectoria por acción del carro lanza aguas. Luego de arrojar el artefacto, el sujeto se quedó unos minutos en el lugar de la manifestación y luego caminó hacia la Plaza Italia, permaneciendo en el monolito por alrededor de una hora y media. Ellos lo siguieron a una distancia aproximada de 15 metros, en diagonal y sin perderlo de vista. Agrega, que el sujeto cuando se encontraba en el monolito descansando, se sacó la capucha y la antiparras blancas que llevaba puestas y las guardó, sacando una polera clara que se puso en el mismo lugar, en que estaba en compañía de una mujer.

Refiere, que todo lo acontecido lo iban informando al personal de apoyo para que pudieran detenerlo cuando se dieran las condiciones óptimas, proporcionándoles las características y las imágenes que había grabado Neil Dercolto con su celular personal, a un grupo de WhatsApp que habían creado para la diligencia y que eliminaron una vez terminado el procedimiento. Las imágenes de la grabación del celular de Dercolto, además contaban con el apoyo de las cámaras de seguridad de la Municipalidad, lugar en que se encontraba la teniente Galaz que los ayudaba y orientaba en caso que fuera necesario que intervinieran las Fuerzas Especiales. La detención fue efectuada por otros funcionarios a cargo de Álvaro Martínez y en circunstancias que el imputado llevaba puesta la polera que se había colocado en el monolito, de color clara y los mismos short que describió.

Al exhibírsele los **Otros Medios de prueba N°5**, el testigo describió las imágenes de acuerdo a su relato. En el primer video que se exhibió en audiencia, indicó que se puede observar el sujeto con las características indicadas y ejecutando la acción descrita en que el sujeto se agachó dando la espalda al carro policial, que encendió la mecha del artefacto, se giró hacia el carro y efectuó el lanzamiento.

En el 2° video exhibido, refiere el testigo que se trata de aquel que se obtuvo de las cámaras de seguridad de la municipalidad y que eran observadas en la 19° comisaría. En las imágenes, indica que se observa a la derecha el sujeto que encendió la molotov que portaba, con la mochila y que se levantó y corrió hacia el carro con la mecha encendida, lanzando la molotov con la mano derecha en dirección al carro policial. Se observa que se retiró de Merced con Irene Morales y se juntó con una mujer en dirección al parque Bustamante, se sacó la capucha y continuó con el torso desnudo y la mochila en la espalda. Luego, con la mano izquierda llevaba la antiparras, con las mismas vestimentas. Luego, en el monolito se lo ve descansando, conversando con la mujer, tiene la mochila al lado con la capucha y las antiparras, vistiendo el mismo short y el bóxer característico. Los funcionarios lo mantenían a la vista en las inmediaciones del parque Bustamante. Luego, se lo observa caminando por el parque en dirección al sur y luego por la vereda poniente.

Refiere que el detenido fue identificado como Christian Valdés Morales.

Corroborando la versión de su compañero de funciones, prestó declaración el cabo 1° de carabineros **Neil Dercolto Rojas**, quien formaba parte del mismo equipo del OS7 que prestaba funciones ese día y señaló en estrados que en el mismo contexto y lugar referido por su compañero Bustamante, en Irene Morales con Merced observaron a un sujeto delgado de tez morena que ocupaba una capucha gris, antiparras blancas, se encontraba a torso desnudo, tenía un tatuaje en el brazo y vestía jeans tipo bermudas azul y bóxer que le sobresalía en que se veían las letras TOP en color rojo, usaba una mochila calipso con rosado que manipulaba un artefacto incendiario tipo Molotov. Lo vio que sacaba del bolso una botella de vidrio con líquido combustible y le

colocó un pedazo de genero o mecha y luego el sujeto lanzó el artefacto encendido hacia el carro lanza aguas. Cuando lo vio manipulando el artefacto, dio aviso de inmediato a los demás funcionarios vía WhatsApp que habían creado en el departamento el mismo día, a fin de que la teniente Galaz que estaba en las cámaras municipales lo pudiera enfocar mejor. El WhatsApp se había creado en los momentos de la preparación del servicio y en él compartían ubicaciones y lo que estaba pasando para mantener un trabajo coordinado. Asimismo, con su celular grabó el momento en que el sujeto lanzó el artefacto hacia el carro, con la mano derecha, el que no logró dar al objetivo, cayendo al costado de un árbol que se encontraba en el parque. El carro estaba lanzando agua y justo se dirigía a la dirección en que se encontraba el imputado. Las imágenes las tomó a unos 15 metros de distancia y fueron entregadas bajo cadena de custodia a Labocar.

Agrega, que como se encontraban ante la comisión de un delito flagrante, iniciaron un seguimiento al imputado sin perderlo de vista, en que el sujeto recorrió las inmediaciones del sector, caminando por Irene Morales al oriente, cruzo la Plaza Baquedano y llegó al inicio del Parque Bustamante en un monumento en el cual se sentó a descansar y se colocó una polera blanca con un rostro en el pecho y luego avanzó por el parque hacia el sur, instalándose en Ramón Carnicer con Bilbao, se mantuvo en ese lugar y como ellos se estaban comunicando son los vehículos comando lograron coordinar la detención del sujeto a las 20:25 horas. Indica que siempre lo siguieron a una distancia de aproximadamente 10 o 15 metros, por la vereda del frente en diagonal.

Al exhibírsele los otros medios de prueba N°5, dio cuenta con el apoyo de las imágenes de los mismos hechos descritos en forma precedente.

Que, en similares términos y en cuanto a las características del procedimiento gestado ese día, dio cuenta de los hechos el sub oficial mayor de carabineros **Henry Sotomayor Arauco**, quien se encontraba en un vehículo comando ubicado en Ramón Carnicer con Bilbao y conoció de la detención del imputado y de las diligencias efectuadas por los funcionarios Bustamante y Dercolto a través del grupo de WhatsApp creado para la gestión del procedimiento.

Que, el jefe del procedimiento **Álvaro Martínez Verdugo** dio cuenta de éste, explicando que el 28 de noviembre de 2019 se encontraba en calidad de jefe de sección microtráfico del OS7 y fue mandatado por el fiscal Patricio Cooper para realizar diligencias respecto de delitos ocurridos con anterioridad. Ese día a las 15:00 horas aproximadamente, realizó la planificación del servicio para buscar medios de prueba de los delitos previos y designó personal que iría a pie en las inmediaciones de la Plaza Baquedano; en un segundo anillo, personal que se encontraría en vehículos y finalmente, la teniente Galaz, se encontraría en la 19° comisaría monitoreando las cámaras. Para comunicarse en el territorio usaron WhatsApp y sus radios, de acuerdo a la labor que les correspondía a cada funcionario. Agrega, que alrededor de las 18:48 horas, los funcionarios Bustamante y Dercolto que se encontraban en los alrededores de la Plaza Baquedano, sorprendieron aun sujeto delgado, de tez morena, que manipulaba una bomba molotov, la cual luego lanzó, de manera que les avisaron al WhatsApp, ya que como estaban en terreno no podían utilizar radios, enviando el cabo Dercolto, imágenes de los hechos, ya que filmaron el momento en que un sujeto que vestía short, tenía la cabeza cubierta con una capucha, usaba una mochila de colores y antiparras blancas. En razón de aquello decidieron detener al sujeto a las 20:35 en el sector de Ramón Carnicer con Bilbao, un tiempo después de los hechos, por razones de seguridad, leyéndosele los derechos lo que efectuó en forma personal y además, quedó grabado en imágenes. Lo trasladaron a la 33° comisaría y le incautaron especies como una mochila Extreme de distintos colores, dos encendedores, las antiparras de color blanco y la polera gris que usaba como capucha, disponiéndose por la fiscal de turno se le entregaran al teniente Olivares Bruna bajo la cadena de custodia NUE 4982249. Asimismo, le hicieron llegar las imágenes de las cámaras municipales y de los cabos Bustamante y Dercolto. En relación a las vestimentas que usaba el imputado al momento de la detención, usaba una polera blanca con una cara en el pecho, ya que al momento de lanzar el artefacto se encontraba a torso desnudo, tenía short azul y zapatillas grises y se encontraba en posesión de las especies indicadas

que fueron incautadas. Las grabaciones y especies fueron entregadas a Labocar para la confección de las pericias correspondientes.

En cuanto a la detención del imputado, le fueron exhibidas las imágenes de los *otros medios* N°5, en que reconoció que se trata de la detención del imputado y la correspondiente lectura de sus derechos, en que tuvo participación.

En relación a las imágenes obtenidas en el procedimiento, prestó declaración el mayor de carabineros **Erwin Loncón Leviante**, quien manifestó que le correspondió realizar un set de fotografías a partir de imágenes obtenidas en el grupo de WhatsApp que el equipo a cargo del procedimiento había creado, como asimismo, con la persona detenida identificado como Christian Valdés Morales, que se encontraba en dependencias de la 33° comisaría.

En las imágenes que se le exhibieron, reconoció aquellas tomadas al imputado y las obtenidas del grupo de WhatsApp, con las que efectuó el set fotográfico correspondiente a los otros medios de prueba N°1 del Auto de Apertura, haciendo una comparación en las imágenes, de la apariencia del detenido y los elementos que portaba, con las fotografías tomadas del WhatsApp del cabo Dercolto, poniendo en relieve que en la imagen N°5 el imputado se encontraba en la manifestación y portaba una botella de vidrio en su mano izquierda.

II.- Análisis de la prueba a la luz de los elementos del tipo penal en estudio.

Que la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, especialmente las declaraciones de los funcionarios de carabineros **Gonzalo Bustamante Henríquez** y **Neil Dercolto Rojas**, permitieron conocer al tribunal que con fecha 28 de noviembre de 2019, se encontraban en el sector de plaza Baquedano en virtud de una orden de investigar emanada por la fiscalía correspondiente y que les instruía la investigación de delitos cometidos en el contexto del estallido social. Indicaron que ese día se desarrollaba una manifestación en el sector, pudiendo ambos observar que un sujeto de particulares características, se disponía al lanzamiento de una bomba tipo molotov, razón por la cual el funcionario Dercolto procedió a grabar con su celular los hechos que estaban aconteciendo, prestando especial atención en quien

efectuaba dicha acción. Ambos observaron además, el momento mismo del lanzamiento del artefacto encendido hacia el carro policial lanza aguas y luego, mantuvieron un seguimiento al mencionado sujeto, hasta su detención en calle Bustamante con Bilbao.

Que, las peculiares características tanto de vestimentas como de los accesorios que usaba el imputado ese día, permitieron a los funcionarios citados mantenerlo a la vista, sin que pudieran confundirse con otra persona que se encontraba en la manifestación, teniendo en cuenta que se encontraban en un contexto de alta conmoción pública, en que había mucha gente y que varios de ellos realizaban conductas disruptivas, especialmente en contra de carabineros y sus vehículos, lo que hacía de especial relevancia que los funcionarios presentes ese día, no confundieran al imputado y estuvieran con vestimenta civil, a fin de poder detectar la distintas acciones reñidas con la ley, sin llamar la atención de los manifestantes. En ese contexto, las peculiares características del acusado, consistentes en bermudas de jeans color azul, el bóxer azul que sobresalía de su pantalón con la leyenda TOP, andar a torso desnudo, usar antiparras blancas, embozar su rostro con una polera gris y portar una mochila de varios colores claros y llamativos, lo hacían especialmente identificable, tal como dieron cuenta los funcionarios Dercolto y Bustamante.

En el mismo sentido, las vestimentas civiles de los funcionarios citados les permitieron adicionalmente, observar todo el curso causal de los acontecimientos, en cuanto vieron cuando el acusado sacó la botella de su mochila y se agachó para encenderla, momento en el cual el funcionario Dercolto inició una grabación con su celular, pudiendo dar a conocer lo sucedido no sólo a través de su testimonio, sino que además aportar al juicio un registro audiovisual de lo que había acontecido. Explicaron los funcionarios toda la acción corporal que el agente desplegó, en cuanto dio zancadas, tomando luego impulso para lograr que el elemento lanzado llegara al objetivo pretendido, es decir, que el artefacto explotara en el carro de carabineros. Reportaron en forma clara, que el objeto lanzado se encontraba encendido y que se trataba de una botella de vidrio con una mecha, de modo tal que no era posible confundirlo con un objeto diverso como pudiese ser una piedra,

un tarro de pintura u otro, ya que las características físicas del objeto y el hecho que se encontrare encendido, daban cuenta que se trataba de una artefacto incendiario del tipo molotov, el que si bien no logró cumplir con el objetivo pretendido en cuanto el mismo carro lanza aguas logró apagar la llama, ello ocurrió cuando el objeto ya había sido lanzado precisamente en dirección al mismo carro que impidió a través del agua, causara daños a las personas o bienes públicos o privados.

Que, adicionalmente el tribunal observó los hechos objeto de la acusación, en las grabaciones de la cámara tomada por el cabo Dercolto y de aquella ubicada en la vía pública de la municipalidad, - **otros medios de prueba N°5** - en las que se pudo visualizar la acción descrita por los funcionarios de carabineros, como asimismo, las características físicas y de vestimentas del acusado, que reportaron. En efecto, en las imágenes aportadas por la grabación del cabo Dercolto, se puede observar los hechos desde el mismo plano o nivel, y aun cuando se visualiza en ellas bastante concurrencia de gente, sólo uno de los presentes es quien lanza un artefacto hacia el carro policial, observándose además, que el carro estaba lanzando agua hacia los manifestantes, frustrando así la explosión del objeto encendido lanzado en su dirección. Las cámaras de la municipalidad toman las imágenes desde arriba, ya que son cámaras que se encontraba en la vía pública y evidencian los mismos hechos desde otro plano. Las imágenes además, fueron de buena calidad y definición, de manera que al tribunal no le quedó dudas que el objeto lanzado al carro policial, se trataba de un artefacto explosivo o incendiario del tipo molotov, toda vez que las imágenes demuestran cómo el imputado lo encendió y lanzó a su objetivo. Las imágenes refuerzan además, las descripciones físicas y de vestimentas que los funcionarios efectuaron del acusado, quien usaba un short bermudas de jeans, estaba a torso descubierto, usaba antiparras blancas, embozaba su rostro con un trapo gris y usaba la mochila de diversos colores claros, aspecto físico que lo distinguía del resto de los manifestantes.

Que, las grabaciones citadas además, de insumo para confeccionar un set de fotografías, por el mayor de carabineros **Erwin Loncón Leviente**, en las que se pudo efectuar acercamientos de las

imágenes obtenidas y comparaciones con otras y de esa manera refrendar la naturaleza del objeto lanzado. En efecto, en las imágenes 8, 9 y 10 de los otros medios de prueba N°3, se aprecia en forma clara y evidente que el objeto tiene una mecha encendida y que es de similar aspecto a una botella de vidrio. Asimismo, en las imágenes 35 y 36 se aprecia en forma clara que el imputado se encuentra agachado, encendiendo el artefacto que luego las imágenes lo muestran encendido. A mayor abundamiento, la perito **María Angélica Mendizábal Cofré** analizó las imágenes indicadas, reportando que fue ella quien incorporó las flechas a las fotografías 8 y 10 y que el objeto al que apuntan impresiona como la llama de un elemento incendiario que al ir en movimiento se aprecia como alargada. Asimismo refirió que en las fotografías 35 y 36 se observa como el sujeto está encendiendo el artefacto, tal como destacó al agregar una flecha a la imagen 36.

En cuanto al procedimiento, su coordinación y corroborando las versiones de Bustamante y Dercolto, se conoció el testimonio del jefe del procedimiento mayor **Álvaro Martínez Verdugo** y del sub oficial mayor **Henry Sotomayor Arauco**, quienes conocían de las labores de los dos primero funcionarios, en virtud de que el equipo que prestaba servicios ese día, se comunicaba en tiempo real, a través de un grupo de WhatsApp, creado específicamente para ese procedimiento y que permitía la coordinación de las distintas acciones a seguir y el envío de imágenes y videos para que no perdieran de vista al imputado, ya que había funcionarios que se encontraban a pie y otros en vehículo, todos ellos vestidos de civil para facilitar su labor. A través de esa coordinación, pudieron efectuar un seguimiento al imputado, verificado cómo cambiaba la apariencia primitivamente observada, en tanto en el trayecto hacia un monumento ubicado al inicio del Parque Bustamante, se sacó las antiparras y la polera que embozaba su rostro y luego, cuando se detuvo en el monumento a descansar, se puso una polera blanca con un rostro en el pecho, la que vestía al momento de la detención y asimismo, las antiparras y polera gris fueron especies que luego le fueron incautadas en la unidad policial. Del cambio de apariencia y su descanso en el monumento indicado también se cuenta con apoyo de imágenes que el tribunal pudo apreciar y que refrendan

los testimonios de los funcionarios de carabineros. Adicionalmente, el Mayor Martínez dio cuenta de la detención del imputado en las intersección de calles Francisco Bilbao con Ramón Carnicer, dichos que fueron apoyados con un video en el que se aprecia la lectura de los derechos al detenido en el carro policial – otros medios de prueba N°5 -.

II. Motivos de Rechazo de la solicitud de absolución de la Defensa.

Que, la solicitud de absolución de la defensa fundada que la prueba fue insuficiente para acreditar el delito, carece de todo sustento, ya que la prueba incorporada en el curso de la audiencia de juicio oral no presentó fisuras o inconsistencias que ensombrecieran su aptitud probatoria y que trajeran como consecuencia – como pretende la defensa – la incapacidad de ésta para establecer el delito de arrojar elemento incendiario. En efecto, quedó claro al tribunal como se dijere en forma precedente, la calidad de artefacto incendiario del objeto lanzado por el acusado, ya que acerca de ello se rindió prueba testimonial, pericial e imágenes, que dejan de manifiesto su naturaleza. Es así que primer lugar, se contó con la declaración de dos funcionarios de carabineros quienes dieron cuenta que el imputado manipulaba una botella, a la cual le encendió una mecha y que la lanzó al carro policial en el contexto de una manifestación en una fecha cercana al estallido social. Se debe considerar que los testigos citados tienen especial conocimiento de esta clase de elementos en tanto son los funcionarios encargados del orden público y pudieron distinguir la naturaleza del elemento lanzado. Asimismo, la perito Mendizábal dio cuenta de aquello al indicar que en las fotografías el objeto lanzado estaba encendido y el tribunal pudo apreciar las imágenes en los videos y fotografías incorporadas.

En relación al mismo punto, si bien es cierto no se contó con prueba pericial que diera cuenta del contenido de la botella que portaba el imputado, - toda vez que quedó claro de las imágenes y de las declaraciones de los funcionarios Dercolto y Bustamante que se trataba de una botella que contaba con una mecha que el imputado encendió – ello deviene en una prueba prácticamente imposible, no solo en este juicio sino en la mayoría de ellos, ya que la acción de arrojarlos a algún

objetivo, provoca que explote – incendiando algún bien público o privado – o que se quiebre sin explosar, en ambas hipótesis la botella se rompe de modo tal que el líquido que contenía se pierde, sin que pueda analizarse. Por otra parte, el contexto fáctico en que estos artefactos son lanzados generalmente corresponden a una protesta o reunión masiva en la vía pública, y por ende deviene en que no sea posible obtener los restos del artefacto, ya que para ello tendría que contarse con un sitio del suceso aislado, sin que la prueba se contamine, lo que nuevamente se trata de una hipótesis, a lo menos, poco plausible de materializar. Es así que la prueba de otra naturaleza para este tipo de ilícitos cobra especial relevancia, como lo es en este juicio las declaraciones de los carabineros Dercolto y Bustamante quienes conocen este tipo de artefactos, y presenciaron los hechos, dando cuenta de que se trataba de una bomba del tipo molotov, declaraciones que se vieron refrendadas por la imágenes ya reseñadas, que muestran que se encontraba encendida, para lo cual necesariamente debe existir un activo – sea bencina u otro – que lo encienda. Que, en el mismo orden de ideas, no era posible – como argumentare la defensa – que los funcionarios Bustamante y Dercolto recogieran los restos de la botella para luego efectuar una pericia de la misma, ya que en primer término ésta necesariamente se quebró en la caída y no contaban con ningún medio para certificar que esos restos correspondían a aquellos generados por la botella lanzada por el acusado, ya que el lugar se encontraba lleno de gente, estaba funcionando el carro lanza aguas, por lo que la obtención de esa evidencia habría carecido de toda pulcritud y por ende, de eficacia probatoria. Lo mismo hubiese acontecido en caso de haber concurrido con posterioridad a recuperar restos de botella, ya que el sitio del suceso habría estado en extremo contaminado, y el aporte probatorio de una evidencia obtenida en esas condiciones sería nulo. El hecho que los funcionarios hayan grabado los hechos y específicamente al imputado, no resultaba una acción riesgosa como pretende la defensa, ya que en la actualidad efectuar grabaciones con aparatos celulares es de toda cotidianeidad, de modo tal que esa acción no llamó la atención de los manifestantes, ni menos los hizo sospechar de su

calidad de carabineros, razón por la cual tales argumentaciones serán desestimadas.

En otro orden de ideas, no existe divergencia en las declaraciones de Dercolto y Bustamante – como pretende la defensa – ya que uno de ellos habló de manipular un artefacto y el otro describió la acción de encender la mecha y lanzarlo, dando una explicación más descriptiva, pero en definitiva estaban refiriéndose a la misma acción, ya que para lanzar un artefacto, necesariamente había que encenderlo – o manipularlo – y esa acción fue refrendada por las imágenes, que dan cuenta de toda la acción corporal que desplegó el acusado, quien luego lanzó el elemento encendido unos después de que se lo observa agachado, dejando claro al tribunal que necesariamente lo prendió cunado se agachó dando la espalda al carro, acción que además se encentra en consonancia con la incautación de dos encendedores en su poder, los cuales funcionaban correctamente, tal como indicó el perito Olivares.

Que, la ausencia de restos de hidrocarburos en las manos y vestimentas del acusado, en nada altera la conclusión de condena a la que ha arribado el tribunal. En efecto, en primer término el perito **Guillermo Olivares Bruna**, teniente de carabineros, indicó que el 28 de noviembre de 2019 en la 33° comisaría tomó muestras en ambas manos con un trozo de gasa embebido con hexano, como asimismo, en las zapatillas y polera del detenido Valdés Morales. Luego, la perito **Marcela Guerrero Langenegger**, en su calidad de químico explicó a estos jueces que efectivamente no se encontraron restos de hidrocarburos en las muestras tomadas por el teniente Olivares, señalando que se utilizó la técnica de cromatografía gaseosa con espectrometría de masas. Indicó que la ausencia de estos elementos se puede deber a la volatilidad de éstos, ya que los compuestos derivados del petróleo, como la bencina, alcohol, diésel o parafina, son los primeros destilados y tienen la particularidad de ser muy volátiles, ya que el cambio físico se genera a temperatura ambiente, de manera que se diluye con el tiempo estando en contacto, siendo el tiempo máximo de hallazgo, el lapso de una hora en las manos, y en telas puede ser un poco más. Es así que teniendo en consideración que el lanzamiento de la bomba de acuerdo al video de la

municipalidad se produjo exactamente a las 18:58 horas y el acusado fue detenido a las 20:25 horas, luego llevado a la 33° comisaría, se puede concluir que transcurrió más de dos horas entre el lanzamiento y la toma de la muestra, es decir, se extendió con creces el lapso de una hora referido por la perito para que se pueda encontrar restos de hidrocarburos en las manos y vestimentas del acusado, de modo tal que la ausencia de hidrocarburos no puede ser estimado como un elemento que genere alguna duda en el tribunal, toda vez que aquello era una consecuencia química esperable en razón del tiempo transcurrido.

Que, los testigos funcionarios de carabineros no hayan reportado que el acusado tuviere olor a bencina u otro elemento inflamable al momento de la detención, - como pretende la defensa - no resta credibilidad ni fuerza a la prueba rendida, ya que como indicó la perito Guerrero se trata de elementos de alta volatilidad que tal como desaparecen en un tiempo acotado de manos y objetos, obviamente también su aroma desaparece, teniendo en cuenta además, el tiempo transcurrido entre el momento del lanzamiento y de la detención.

Que, la defensa manifestó que podrían haberse recabado otros indicios que dieran cuenta de la calidad de artefacto incendiario de aquel arrojado por el acusado, y el tribunal estima que fue aquello lo que precisamente aportó en juicio el Ministerio Público a través de la prueba ya analizada que no dejó dudas al tribunal de la calidad y naturaleza del artefacto arrojado por el acusado.

Que, asimismo, se desatenderán las alegaciones de ilegalidad del procedimiento, ya que si bien los funcionarios de carabineros se encontraban en el lugar de la manifestación en virtud de una orden de investigar derivada de hechos diversos, se encontraron en presencia de un delito flagrante, que los facultaba y obligaba a actuar, existiendo incluso registro de la lectura de los derechos del detenido. En ese contexto además, las imágenes tomadas por el cabo Dercolto, en caso alguno infringieron la legalidad, sino más bien garantizaron un procedimiento ajustado a la ley en cuanto las actuaciones policiales fueron registradas con imágenes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal. En cuanto a una supuesta infracción del artículo 226 y 226 bis del Código Procesal Penal, no es

tal, ya que dicha normativa tiene un ámbito de aplicación diverso al que pretende la defensa, toda vez que se refiere a medidas intrusivas en el ámbito de las comunicaciones y vida privada de las personas, contexto completamente diverso al que nos ocupa, por cuanto los hechos acontecieron en la vía pública, en el contexto de una manifestación, y en que el acusado se encontraba cometiendo un delito, actuando los funcionarios de carabineros de conformidad a lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal. No se debe perder de vista que el derecho a la privacidad que consagra la Constitución Política de la República en el artículo 19 N°4, se refiere este como la *protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y asimismo, la protección de sus datos personales*, resguardo que no alcanza al ámbito público, como por ejemplo cuando nos encontramos en la calle, en que por razones de seguridad se han instalado numerosas cámaras con distintos objetivos y a cuya acción todos los ciudadanos nos encontramos expuestos. Ahora bien, en cuanto a la grabación realizada con el celular del cabo Dercolto, no se debe perder de vista la facultad del ya citado artículo 181 del Código Procesal Penal que es un imperativo legal para los carabineros, quienes deben recabar cuanto condujera a la comprobación del hecho y sus partícipes y teniendo en consideración el contexto en que los hechos se desarrollaban, - una manifestación en la vía pública, con el imputado embozado - resultaba de especial relevancia consignar sus características físicas y de vestimentas, como asimismo la acción misma del lanzamiento, dadas las dificultades de recuperación de evidencia, de modo que la grabación efectuada deviene en una prueba que era del todo gravitante.

Por otra parte, las grabaciones de imágenes efectuadas en el celular del cabo Dercolto fueron debidamente rescatadas de su teléfono y se les asignó un número único de evidencia, descartándose que a su respecto existiere alguna manipulación o alteración que le restare mérito probatorio. Lo mismo ocurre con las imágenes obtenidas por la teniente Galaz en las dependencias de la municipalidad de Providencia, ya que fueron debidamente resguardadas. El hecho que no se levantara un acta respecto de aquello, no resulta relevante, ya que como se dijo, su integridad fue debidamente resguardada mediante la asignación de

NUE, no existiendo además ninguna alegación en torno a una presunta alteración de la evidencia.

Es así que las declaraciones testimoniales y periciales, en conjunto con las imágenes y videos incorporadas en el curso de la audiencia de juicio oral, permitieron que el tribunal conociera de los hechos, en cuanto los testigos fueron claros en sus relatos, dieron razón de sus dichos e ilustraron acerca de la forma y circunstancias en que los hechos acaecieron, manteniendo un correlato fáctico que generaron convicción en el tribunal más allá de toda duda razonable de que los hechos ocurrieron de la forma descrita en la acusación por el persecutor.

DECIMO: Hecho acreditado. Que en este orden de ideas conforme fuera razonado en las motivaciones que anteceden, el Tribunal - en mérito de la prueba ya analizada y valorada en los basamentos anteriores - ha dado por acreditado, más allá de toda duda razonable, el siguiente hecho:

El día 28 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 18:58 horas, en la vía pública, en las inmediaciones de Plaza Italia, específicamente en la intersección de calles Merced con Irene Morales, en la comuna de Santiago, Christian Felipe Antonio Valdés Morales, fue sorprendido por funcionarios de Carabineros de Chile, cuando encendió y arrojó a un vehículo policial de Fuerza Especiales que se encontraba en lugar, una bomba molotov o incendiaria, compuesta de una botella de vidrio, combustible y una mecha en su interior.

UNDÉCIMO: Calificación jurídica. Que los hechos acreditados se encuadran dentro de la figura típica del delito contemplado en el artículo 14 letra d) inciso 3° de la ley de control de armas (N° 17.798), en grado de consumado, puesto que se arrojó en la vía pública un artefacto incendiario, cuyos componentes principales fueron una pequeña cantidad de combustible u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, una bomba molotov según designa la ley y como universalmente son conocidos los objetos fabricados a base de una botella de vidrio con una dosis baja de combustible líquido inflamable con un trozo de tela como mecha.

Que las imágenes de video se pudieron apreciar desde que el artefacto fue encendido hasta que fue arrojado en la vía pública.

Que, el artículo 14 D) de la ley de control de armas establece para este ilícito como verbo rector el de *colocar, enviar, activar, arrojar, detonar, disparar, o hacer explosar*, lo que deja de manifiesto que la concreción de cada una de las conductas descritas configura el tipo penal en estudio, y en este caso sin que sea relevante para ello, que el artefacto efectivamente explote o cause incendios o daños en la propiedad o las personas, toda vez que se trata de un delito de mera actividad desde el punto de vista de la conducta del agente – lanzar –, toda vez que la consumación se logra con la sola realización de una acción determinada y no exige la producción de un resultado material separable espacio-temporalmente de la conducta. En relación al bien jurídico protegido, se trata de aquellos delitos de peligro abstracto, en que el legislador establece una presunción de derecho, al considerarla portadora de un cierto grado de peligrosidad para la integridad o seguridad de un bien jurídico, es decir, la conducta debe ser *ex ante*, de un índice de riesgo socialmente intolerable, porque ha creado como efecto o resultante una situación objetiva de riesgo. En consecuencia, son una especie de delito de mera actividad. Es así que en el caso que nos ocupa, el solo hecho de arrojar el artefacto incendiario o molotov a la vía pública, configura la conducta descrita en la norma, sin que sea relevante el hecho de que explosara o no, encontrándose además, en grado de desarrollo consumado.

DUODÉCIMO: Participación. La participación del acusado, en el delito en estudio se estableció con la misma prueba anteriormente referida y adicionalmente la prueba pericial que no dejó dudas en el tribunal acerca de que el detenido fue la persona que previamente arrojó el artefacto incendiario. En efecto, en primer lugar los peritos **Guillermo Olivares Bruna y Erwin Loncón Leviante**, obtuvieron fotografías de Valdés Morales y las especies que portaba – mochila, antiparras – cuando estaba detenido en la 33° comisaría y fotografías de los videos registrados con el celular de Dercolto, respectivamente, que sirvieron de insumos para las pericias efectuadas por los peritos Saldías y Mendizábal. En efecto, la perito antropóloga **Vanessa Saldías**

Vergara, efectuó el informe pericial 10603-02-2019, en que realizó una comparación de las características faciales e individualizantes de Christian Valdés Morales y un sujeto signado como S1 – que corresponde a la persona que aparece en las fotografías tomadas de los videos registrados por el celular del cabo Dercolto y las cámaras de la municipalidad – en los que la perito determinó similitudes en los rasgos faciales de ambos sujetos, efectuando una comparación entre las imágenes de ambos. En efecto, pudo determinar similitudes en: cabello corto, oscuro y ondulado, frente recta y restringida, rostro rectangular, arcos superciliares prominentes con cejas semi arqueadas pobladas, con la cola hacia abajo, pómulos prominentes con región geniana poco abultada, nariz mediana con el dorso poco prominente, línea de mentón rectangular, barba alrededor de la boca, rostro y mentón. En cuanto a las características individualizantes, efectuó la comparación con los mismos insumos, determinando en su comparación entre Valdés Morales y S1, las siguientes similitudes: tatuaje en el brazo y ante brazo derecho, que va desde el hombro hasta la muñeca; en la cara interna del brazo izquierdo tatuaje con forma de corona y en la espalda, dos marcas tipo lunar y una mancha de tonalidad café a la parte izquierda de la escápula izquierda.

En las fotografías correspondientes a los **otros medios de prueba N°3**, el tribunal apreció cada una de aquellas similitudes determinadas por al perito, imágenes que además fueron confrontadas en cada uno de los aspectos determinados como similitudes, pudiendo el tribunal apreciar la identidad de cada uno de los rasgos que la perito explicó.

Adicionalmente y corroborando los dichos de la profesional antropóloga, prestó declaración la perito **María Angélica Mendizábal Cofré**, quien en su calidad de diseñadora gráfica realizó un anexo pericial de imágenes al informe 10603-02-2019, respecto de las vestimentas y accesorios del imputado Valdés Morales y un sujeto que en imágenes se lo ve lanzando un artefacto incendiario. Indica que se le remitieron 11 fotografías en que se aprecia al imputado cuando se encuentra detenido en la unidad policial e imágenes de antiparras blancas E1 y mochila marca Extreme E3. Asimismo, recibió un disco digital NUE 4988076 que contenía 11 archivos de video, de los cuales

dos estaban obtenidos de un equipo en altura, son de buena calidad y registran fecha y hora entre las 18:58 y las 19:25 del 28 de noviembre de 2019, en que se aprecia como un sujeto S1 lanzó un elemento incendiario y se aleja con una mujer, sacándose la polera que llevaba en el rostro y las antiparras, quedando a rostro descubierto, colocándose luego una polera blanca con un rostro en el pecho, ya que anteriormente se encontraba a torso desnudo. Los otros cinco videos son tomados a nivel de piso y en ellos se ve el lanzamiento del objeto y desplazarse al sujeto por la calle en compañía de la mujer.

En las fotografías que se le exhibieron a la perito de los **otros medios de prueba N°3**, refiere que es posible identificar en las distintas fotografías tanto las vestimentas del sujeto que se observa en las imágenes lanzando un artefacto incendiario, que usaba pantalones cortos de color celeste, de los cuales sobresalía un bóxer de color azul oscuro, antiparras en la cabeza de color blanco, mochila de colores claros, torso descubierto y con el rostro embozado con una polera color gris. Luego cuando se lo ve caminando se pone una polera de color claro con un rostro. Al comparar dichas imágenes, con las que fueron tomadas al acusado y a las especies incautadas en la unidad policial, la perito da cuenta de las similitudes entre las vestimentas del acusado haciendo una comparación en las distintas imágenes e identificando cada uno de los elementos que se observan similares, tanto en las vestimentas como en lo referente a la mochila y las antiparras incautadas, concluyendo la perito que existían numerosas similitudes en las vestimentas y accesorios del detenido Valdés Morales y el sujeto identificado como S1.

Que, la prueba rendida y analizada, especialmente las declaraciones de los carabineros Dercolto y Bustamante quienes vieron al imputado lanzando un artefacto molotov y que reportaron en estrados las características físicas y de vestimentas del acusado, y luego lo siguieron sin perderlo de vista hasta la detención, como asimismo la prueba pericial de las profesionales Saldías y Mendizábal que efectuaron un análisis pormenorizado de las características físicas de vestimentas y accesorios que llevaba el acusado, y señalaron cada una de las similitudes encontradas entre las imágenes tomadas el día de los

hechos y el detenido, constituyeron prueba de especial calidad que no dejó dudas al tribunal acerca de la participación del acusado en los hechos.

Es así que los actos desplegados por el acusado son inequívocamente de ejecución inmediata y directa del delito, en los términos del artículo 15 n° 1 del Código Penal, por lo que será condenado como autor del ilícito por el que fuere acusado.

DECIMO TERCERO: Audiencia de determinación de pena. Qué en la oportunidad prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, el **Ministerio Público**, manifestó que no ha invocado modificatorias, igualmente acompaña extracto adulto y adolescente del imputado, en que no tiene condenas como adulto. En cuanto al registro adolescente, figura la causa rit 2671- 2011 del 12° Juzgado de Garantía, en que registra una condena por el delito de robo con violencia, en que fue condenado a un año y seis meses de libertad asistida especial. Se acompaña la sentencia correspondiente. Mantiene la solicitud de pena indicada en el Auto de Apertura.

La **Querellante**, refiere que teniendo en consideración lo dañoso del delito, pide la misma pena que el Ministerio Público.

La **Defensa** a su turno señala que en atención a lo dispuesto en el artículo 14 d) de la ley de armas, la extensión de la pena va desde los tres años y un día a cinco años de presidio menor en su grado máximo y estima que concurren dos atenuantes, la de irreprochable conducta anterior, ya que los antecedentes que su representado registra en su extracto de responsabilidad adolescente y dada la finalidad de la ley respectiva, no se deben considerar. Estima que adicionalmente, concurre la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos del artículo 11 N°9 del Código Penal, en cuanto principalmente cuando el equipo de Labocar concurrió al lugar en que el acusado estaba detenido, éste colaboró para la posterior confección de dos informes periciales, y accedió a la realización de pericias de detección de hidrocarburos y asimismo, en la toma de fotografías en que incluso se sacó la polera, lo que permitió obtener imágenes que también fueron considerados por la perito Mendizábal, apuntando a las manchas de la espalda que se obtienen con la colaboración de su representado.

Asimismo, se debe considerar la menor extensión del mal causado, ya que el artefacto sólo fue arrojado y no trajo otras consecuencias que agravaran el injusto, de manera que estima que la pena de tres años y un día es la adecuada para el contexto.

En cuanto a la forma de cumplimiento de la pena, solicita la libertad vigilada intensiva, ya que si bien en el artículo 1 inciso 2° de la ley 18.216 se excluye este delito, debe considerarse que el Tribunal Constitucional ha estimado en diversos fallos que el artículo 1 es inconstitucional y esto se debe relacionar con tratados de Derechos Humanos que rigen la materia, en que se dispone que las sanciones penales deben propender a la resocialización del sentenciado y estima, que la pena efectiva no contribuye a ese fin. Por otra, hay fallos de tribunales de garantía en pronunciadas en procedimientos abreviados en la ley de control de armas que se han pronunciado al respecto, concediendo la pena sustitutiva invocada, incluso el 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, también aplicando el criterio de la analogía, ha concedido la pena sustitutiva del artículo 15 bis de la ley 18.216, sanción que además, solicita se imponga sin costas. Acompaña informe social en que señala que su representado tiene una oferta de trabajo, trayectoria de trabajo y ausencia de conductas disruptivas teniendo arraigo social y familiar.

Al hacer uso del traslado, el Ministerio Público indicó que en cuanto a la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, se entiende que no pueden perjudicar a un adulto cuando la conducta adolescente se invoca la agravante de 12 N°16 del Código Penal, pero en este caso es a la inversa, en que existe una actuación positiva, ya que la atenuante de irreprochable conducta anterior analiza la conducta previa del infractor, se trata de un premio que radica en la rebaja de la condena y se debe analizar si el sentenciado ha sido objeto de reproche penal y en este caso, es más grave aun, ya que fue condenado y el hecho que esa condena conste en un sistema diverso, es precisamente lo que pretende la ley 20.084, pero considerar que el menor nunca ha estado involucrado en conflicto penal, resulta excesivo. En cuanto a la colaboración sustancial, cree que durante la investigación no se contó con antecedente aclaratorio alguno de parte del sentenciado, ya que no

prestó declaración, y si bien firmó el acta para la extracción de prueba de nitritos, ésta suele ser favorable a la defensa y de no sacarse las fotografías se habría llegado a la misma conclusión, ya que contaban con las evidencias incautadas como antiparras, mochila etc. En relación a la pena solicitada, no se opone a la pena de tres años y un día, pero le parece atentatorio a la legalidad, la concesión de la pena sustitutiva pretendida por la defensa, ya que independientemente de los pareceres, la ley es clara en los delitos exceptuados de los beneficios, si bien se invocan fallos del Tribunal Constitucional, éstos no son uniformes y lo que influye es la situación procesal de sus antecedentes. No se cuenta con sentencia de Tribunal Constitucional, respecto de este caso, de manera que no se puede hacer extensiva la sentencia en un caso diverso.

La Querellante, se adhiere a lo indicado por la fiscal.

DÉCIMO CUARTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Que, la atenuante del **artículo 11 N°9 del Código Penal** de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, será acogida, toda vez que Valdés Morales aun cuando no declaró en estrados, prestó una importante cooperación, al permitir la toma de muestras de restos de hidrocarburos en sus manos y vestimentas, como asimismo, permitió que se le tomaran fotografías cuando se encontraba detenido y que sirvieron de insumo para la confección del informe pericial de la antropóloga Vanessa Saldías, pericia esta última que resultó relevante para la determinación de su participación en los hechos. En cuanto a la prueba de hidrocarburos, si bien le fue favorable, el acusado no podía conocer a priori cuál sería el resultado de la pericia que se realizaría con las muestras tomadas, de manera que se estima que su colaboración reviste la relevancia necesaria para configurar la morigerante invocada.

Que, sin embargo, se rechazará considerar la atenuante de irreproachable conducta anterior, ya que si bien su Extracto de Filiación y Antecedentes no registra anotaciones, mantiene una condena como adolescente por el delito de robo con violencia, el cual tiene asociada una pena de crimen, circunstancia que impide que su conducta se estime como libre de reproche o mácula. En efecto, si bien su condena

pretérita lo fue bajo un régimen sancionatorio especial, la concesión de la minorante no redundaría en un análisis matemático de si su extracto registra o no anotaciones, sino que se trata de analizar su conducta pretérita en su integridad, y conociendo que materializó un hecho de la gravedad de un crimen, resulta imposible conceder la atenuante pretendida por la defensa, ya que ello implicaría desatender el espíritu de la norma del artículo 11 N°6 del Código Penal.

DÉCIMO QUINTO: Determinación de pena. Que, el acusado Valdés Morales fue declarado responsable de un delito de arrojar artefacto explosivo, previsto y sancionado en el artículo 14 D) de la ley 17.798, que establece para este tipo de injusto, la pena de presidio menor en su grado máximo. Teniendo en consideración, que le beneficia la atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos del artículo 11 N°9 del Código Penal y conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, el tribunal, establecerá la sanción en su mínimo, tal como solicitare la defensa, determinándose la sanción en tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.

DÉCIMO SEXTO: Forma de cumplimiento de la pena. Que, no se concederá sustitutiva alguna, atendida la expresa disposición del artículo 1 de la ley 18.216, que excluye precisamente los delitos contemplados en la ley de armas. Se desestimará la petición de la defensa de establecer la citada norma como inconstitucional, por haberse declarado así en procesos diversos y efectuando una interpretación pro reo y a la luz de tratados internacionales, ya que un Tribunal de la República está llamado a dar cumplimiento a la legislación vigente, y teniendo en consideración la el efecto relativo de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, no resulta plausible ni ajustado a derecho aplicar la interpretación pretendida por la defensa.

DÉCIMO SEPTIMO: Costas. Que atendido que el acusado fue patrocinado por defensor privado, se le condena en costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°9, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 24, 25, 29, 50, 68, 69 del Código Penal; artículos 1, 45, 47, 295, 297, 323, 329, 340, 341, 342,

343, 344, 346, y 348 del Código Procesal Penal, artículos 1, 2 y 14 D) de la ley 17.798; ley N° 18.216, se declara:

I.- Que se condena a **CHRISTIAN FELIPE ANTONIO VALDÉS MORALES** como autor de un delito de lanzamiento de artefactos incendiarios contemplado en el artículo 14 D) de la ley de control de armas (N° 17.798), en grado de consumado, perpetrado el día 28 de noviembre de 2019, en la comuna de Santiago de esta ciudad, a la pena de **tres años y un día de presidio menor en su grado máximo**, a la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

II.- Se ordena el comiso de las prendas incautadas.

III.- Que, la pena corporal impuesta deberá ser cumplida de manera efectiva, toda vez que no se contempla pena sustitutiva para esta clase de delitos conforme al artículo 1° inciso 2° de la ley N°18.216, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad con ocasión de esta causa desde el 29 de noviembre de 2019, y que asciende a seiscientos diecisiete días (617), tal como da cuenta el certificado de la jefe de unidad de causas del tribunal.

IV.- Se condena al sentenciado en costas, conforme lo razonado el motivo último de esta sentencia.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Sentencia redactada por la magistrado doña María Alejandra Cuadra Galarce.

RUC : 1901292336-0.

RIT : 234-2020.

PRONUNCIADA POR LOS JUECES TITULARES DEL CUARTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ESTA CIUDAD, PRESIDIDA POR DON JUAN CARLOS URRUTIA PADILLA E INTEGRADA POR DOÑA CRISTINA CABELLO MUÑOZ Y DOÑA MARIA ALEJANDRA CUADRA GALARCE.